

La responsabilidad política de Álvaro Uribe frente a la crisis del DAS

Pedro Santana Rodríguez
Presidente
Corporación Viva la Ciudadanía

Las denuncias de Rafael García, ex director de informática del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, son muy graves y comprometen directamente al presidente Álvaro Uribe Vélez puesto que si alguna entidad pública depende de la Presidencia, es precisamente el DAS, que es la policía política que maneja la inteligencia del aparato Ejecutivo. Sin embargo, el alto gobierno y, en particular, el Presidente guardan silencio y los medios también callan, cuando lo que se está denunciando es tan grave o más que el propio proceso ocho mil.

Las denuncias en concreto

Rafael García sostuvo que desde el momento de su posesión, el director nombrado directamente por el presidente Álvaro Uribe Vélez, Jorge Aurelio Noguera Cote, le hizo saber que su administración colaboraría con los grupos de autodefensa y, en particular, con los de la Costa Atlántica. “Jorge Noguera mantenía contactos con Hernán Giraldo --Jefe del Frente Resistencia Tayrona-- con David Hernández, 039 --Jefe de las autodefensas del Cesar--, y con Jorge 40, que en aquel entonces era el segundo al mando en el bloque Norte declaró García a la Fiscalía General de la Nación en tres sesiones en las cuales además afirmó que Jorge Aurelio Noguera Cote, tenía una relación estrecha con Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40” y reveló que el 10% del valor de los más jugosos contratos de la entidad iban a parar a las arcas del jefe paramilitar”.

También reveló que los más altos funcionarios del DAS habían entregado a las autodefensas de la Costa Atlántica, una lista con los nombres de sindicalistas, estudiantes y dirigentes de izquierda que luego fueron asesinados. Confesó, además, haber participado en la preparación de un fraude que contribuyó a elegir a siete congresistas en 2002 y que dicho fraude también se habría cometido para favorecer la elección de Álvaro Uribe en primera vuelta. El fraude dijo habría sido de 300 mil votos.

Tras explicar la relación de Noguera con los comandantes paramilitares de la Costa Atlántica, García abrió un nuevo y escalofriante capítulo: la muerte de sindicalistas y dirigentes de izquierda a manos de agentes del DAS y de un grupo de sicarios de las AUC.

García aseguró que a comienzos de 2004 recibió la visita de un amigo y que a raíz de una investigación interna en la sección de Inteligencia del DAS descubrió que, en efecto, desde el DAS habían enviado a los paramilitares una lista con 24

dirigentes --incluida una mujer-- de Sintragrícola, Sindeagricultores, Anthoc, Fensuagro y la Confederación General de Trabajadores, CGTD, que adelantaban actividades en Bolívar, Atlántico, Sucre y la Guajira. “Cuando averigüé por la forma como esta información se le hacía llegar al bloque norte de las Autodefensas --relató García-- que era entregada por el director Jorge Noguera a Álvaro Pupo, con destino a ‘Jorge 40’. Álvaro Pupo es pariente de ‘Jorge 40’.

En concretó, responsabilizó a esta macabra alianza entre los paramilitares y el DAS del asesinato de Zully Codina Pérez, enfermera del Hospital Central de Santa Marta que pertenecía a la CGTD, seccional Magdalena y el 17 de septiembre le dieron muerte en Barranquilla al profesor Alfredo Correa D` Andreis. “Me sorprendió mucho el asesinato del profesor Correa puesto que yo había visto el listado antes de esos hechos”.

En resumen en la declaración de García se menciona que el DAS estaba puesto al servicio de los paramilitares, que los paramilitares cobraban comisiones por los grandes contratos que se hacían en el DAS, que conjuntamente asesinaron dirigentes sindicales e intelectuales de izquierda y que propiciaron un fraude para elegir congresistas y favorecer con 300 mil votos las elecciones de Álvaro Uribe en la primera vuelta presidencial en mayo de 2002. Es verdad que García está acusado en la Fiscalía por haber borrado el pasado criminal de algunos delincuentes, pero no hay que olvidar que el director del DAS de la Oficina de Barranquilla está siendo acusado por haber montado supuestos atentados contra el presidente Uribe y, que en efecto, los asesinatos de los que habla García ocurrieron sin que la justicia los halla esclarecido hasta el momento.

Las denuncias por la infiltración paramilitar en altas esferas públicas no solo comprometen al DAS, sino que ya habían sido puestas en conocimiento público por el representante Gustavo Petro Urrego, del Polo Democrático Alternativo quien además demostró que en varias regiones del país la Fiscalía también estaba profundamente infiltrada, como se comprobó luego para el caso de Cúcuta. En donde una de las consentidas de Luis Camilo Osorio, Fiscal General fue descubierta al servicio de los paramilitares que operaban en el oriente del país. Así mismo, se ha comprobado en varias regiones del país la estrecha cercanía de las compañías de vigilancia privada con grupos paramilitares, como por ejemplo se ha denunciado en la Costa Atlántica y concretamente en Cartagena. Recientemente, el superintendente de Seguridad y Vigilancia, Fernando Segura renunció al comprobarse que había asesorado a Enilce López conocida como la “gata” para que recuperara sus 130 armas con igual número de personas que le habían sido retirados por las autoridades competentes.

Pero, lo que más indignación causa es que pese a las graves denuncias que existen contra ellos, el gobierno los mantenga en cargos diplomáticos y no los llame para que respondan por sus actuaciones. Noguera ha sido premiado con el consulado de Colombia en Milán, Italia y, hasta ahora, no ha sido llamado ni por la Fiscalía ni por la Procuraduría ni siquiera por la Contraloría General para que

responda por todos los señalamientos y acusaciones que se le hacen. Qué buena representación la que tenemos en el exterior en nuestro cuerpo diplomático. A este funcionario habría que agregar al también diplomático en Chile, Salvador Arana, quien está siendo investigado por el asesinato de Eduardo Díaz, Alcalde de El Roble en Sucre.

¿En dónde está la responsabilidad política del presidente Uribe?

Esta es la pregunta que nos formulamos. Avanza un proceso de paramilitarización en el país y de desinstitucionalización y el Presidente no responde. Los grandes negocios de los paramilitares no se han desmontado, muchos de ellos siguen asesinando y delinquiendo en medio de un proceso poco transparente en que no se le ha dicho claramente al país qué es lo que se ha negociado. Alguien, suponemos que la oposición, debería realizar el debate político por la responsabilidad del Presidente en toda esta realidad.